

La dictadura y la postdictadura chilena y su contrarrevolución cultural

The Chilean dictatorship and post-dictatorship and its cultural counterrevolution

GRÍNOR ROJO*
Universidad de Chile

Resumen

Este artículo argumenta que el 11 de septiembre de 1973 se dio comienzo a una contrarrevolución en Chile, que esa contrarrevolución no sólo fue de lo obrado por el presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973 sino de lo obrado por el pueblo chileno desde los años veinte y treinta del siglo pasado y, finalmente, que esa contrarrevolución tiene una arista cultural importante. Se sostiene, además, que, con posterioridad al término de la dictadura, no ha habido en Chile un recobro pleno de la democracia sino que la contrarrevolución autoritaria, aunque morigerada en ciertos aspectos, ha seguido en pie y que consistentemente también ha seguido en pie su perspectiva cultural.

Palabras clave: dictadura, postdictadura, contrarrevolución, cultura.

Abstract

This article contends that September 11, 1973 saw the beginning of a counterrevolution in Chile and that this counterrevolution was not only based on the actions of President Salvador Allende between 1970 and 1973 but also on the actions of the Chilean people since the 1920s and 1930s. Lastly, that this counterrevolution has an important cultural edge. It is further argued that, since the end of the dictatorship, democracy in Chile has not fully recovered but rather that the authoritarian counterrevolution, although somewhat restrained, has continued to stand and that its cultural perspective has remained standing as well.

Keywords: dictatorship, post-dictatorship, counterrevolution, culture.

* Doctor en filosofía por la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Profesor universitario, ensayista, crítico cultural y literario, ha enseñado en las universidades de Chile y Austral de Chile; en Estados Unidos, en las del Estado de California y en Ohio State University. Ha sido investigador o co-investigados responsable de ocho proyectos FONDECYT desde 1996. Enseña actualmente en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ha publicado unos treinta libros, siendo alguno de los últimos *Ejercicios críticos latinoamericanos. Novela, ensayo y teatro* (2010, coautor con Graciela Ravetti y Sara Rojo); *Las novelas de la oligarquía chilena* (2011); *Clásicos latinoamericanos. Para una relectura del canon*, dos volúmenes, siglos XIX y XX (2011). *Las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena: ¿Qué leer y cómo leer?* Vol. I. y *Las novelas de la dictadura y la postdictadura chilena: Quince ensayos críticos*. Vol. II (2016). Además, Rojo es autor de varias antologías, ediciones de teatro y crítica, prólogos y de unos doscientos artículos aparecidos en revistas y periódicos de América Latina, Estados Unidos y Europa.

Sostendré en este artículo que al anti-igualitarismo y regresivismo distributivo de los bienes materiales durante la dictadura militar chilena corresponde un anti-igualitarismo y un regresivismo homólogos en lo que toca a los bienes culturales. Es decir que sostengo aquí que el despojo al pueblo chileno de su capital material, del que había logrado hacerse en cincuenta años de luchas sociales ininterrumpidas (no pocas veces durísimas, pienso en el segundo gobierno de Arturo Alessandri y en los de Gabriel González Videla y Jorge Alessandri), es correlativo al despojo de su capital simbólico, el que ese pueblo había hecho suyo durante el mismo período y, más aún, que uno y otro despojos se combinaron potenciándose recíprocamente para la generación de lo que Tomás Moulian denomina el «Chile actual». Podemos pues afirmar hoy, sin temor de equivocarnos, que el gran horizonte de la dictadura militar chilena, y el de aquellos en cuyo beneficio ella actuaba, no fue únicamente la demolición de lo obrado por el gobierno de Salvador Allende en sus tres años de gobierno ni tampoco la sola contención de una crisis que estaba poniendo en peligro la convivencia nacional, como lo aseguraba el Informe Rettig de 1991, donde se explicó el asalto al poder por parte de las fuerzas armadas como el medio penoso al que ellas debieron recurrir para detener los extremismos de la época¹. El horizonte era más ambicioso y consistía nada menos que en un programa de retorno, en todas las esferas de la vida pública, en la económica, en la política, en la social y en la cultural, a un cierto *statu quo ante* que puede que nunca haya existido en realidad, pero que para la oligarquía chilena era su cielo añorado y que ella situaba en la primera mitad del siglo XIX. Volver a ser lo que para ese imaginario oligárquico los chilenos fuimos en aquel entonces, pues eso es lo que somos y de lo que nunca debimos apartarnos: una sociedad respetuosa de los escalafones, en la que cada uno de sus miembros cumple disciplinadamente con la función que por ser él/ella quien es le ha sido asignada por sus superiores.

Además de los tecnócratas neoliberales, o sea de los «intelectuales» de la dictadura, según los sobrestima Moulian, había existido y siguió existiendo en

Chile una capa de intelectuales conservadores, católicos ultramontanos e integristas, en cuyas obras el imaginario que he descrito más arriba se dibuja con perfecta nitidez. En el siglo XX, esta es la corriente que va de un Osvaldo Lira (1904-1996) a un Jaime Eyzaguirre (1908-1968). Y también es este el caso del historiador Mario Góngora (1915-1985) y su tesis spengleriana, según la cual «la nacionalidad chilena ha sido formada por un Estado que ha antecedido a ella» (11)². Es decir que para este historiador en Chile fue el Estado oligárquico, en construcción desde 1830, el que nos hizo ser lo que somos, mientras que son «las guerras defensivas u ofensivas las que a mi juicio han constituido el motor principal» (12).

Más rebuscada («alambicada», dice Cristián Gazmuri) es la reflexión del sociólogo católico Pedro Morandé acerca de la «identidad» latinoamericana y chilena, la que se inicia con su tesis doctoral de 1979, de la que sólo se conoce un resumen titulado *Ritual y palabra: aproximaciones a la religiosidad popular latinoamericana*, que es de 1980 (hay una reedición de 2007, pero no está del todo clara su fidelidad respecto del original). Pero es en *Cultura y modernización en América Latina: ensayo sociológico acerca de la crisis del desarrollismo y de su superación*, de 1984, donde nos encontramos con el raciocinio completo. Sostiene Morandé en este libro que «la identidad de cada cultura particular depende de la manera que ella exprese u oculte el sacrificio y de las instituciones que cree para administrarlo», a lo que añade que «América Latina fue desde el comienzo moderna, sólo que su modernidad no fue ilustrada sino barroca, o sea, no de inspiración secular-iluminista sino religiosa y ritual» (79)³. El

2. Como el propio Góngora lo reconoce, su tesis se encontraba ya presente, en 1928, en la *Fronda aristocrática en Chile* de otro spengleriano, Alberto Edwards (1874-1932).

3. Para desengaño de sus admiradores, me permito señalar que Morandé no es original, aunque sí lo sea la aplicación de este raciocinio al caso de Chile y su haberlo hecho coincidir con la ideología y el imaginario oligárquicos. Ese raciocinio está en el también antiliberal Octavio Paz, en la tercera de las conferencias de *Postdata*, de 1970 («postdata» a *El laberinto de la soledad*, como es sabido) y donde Paz interpreta la matanza de Tlatelolco, del 68, como un «sacrificio ritual». Escribe: «Lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968 fue, simultáneamente, la negación de aquello que hemos querido ser desde la Revolución y la afirmación de aquello que somos desde la Conquista y aun antes. Puede decirse que fue la aparición del otro México o, más exactamente, de uno de sus aspectos [...] lo que se desplegó ante nuestros ojos fue un acto ritual: un sacrificio [...] Para los herederos del poder azteca [alude a

1. «Este informe se refiere a la situación anterior al 11 de septiembre de 1973, y afirma que tal situación y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus transgresiones, pero en ningún caso las justificaron» (16). Rettig es el nombre por el que se ha conocido al *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*.

ser latinoamericano «profundo» se habría mostrado por consiguiente a cabalidad en los siglos XVI y XVII, cuando el «sacrificio» estaba de moda, reuniendo, religando y mestizando (o al revés). Recuérdese, de paso, que la doctrina del mestizaje es un motivo recurrente en la cultura de nuestra segunda modernidad, suscrito por gobiernos como el mexicano de la postrevolución y severamente cuestionado por intelectuales de la talla de Antonio Cornejo Polar en la celebración de un mismo «rito sacrificial» a los indígenas con los españoles (la santa misa católica constituye el espectáculo religador y mestizador por excelencia, evidentemente, el que reúne a los fieles sin diferencias raciales o de clase), y habría iniciado su fase de ocultamiento, pero como un sol que volverá a salir cuando se produzca la derrota de la noche iluminista y atea, es decir de la que se introdujo por primera vez en el borbónico siglo XVIII. Claro está, se supone que el sol volverá a salir cuando los latinoamericanos y los chilenos nos hayamos percatado de nuestras malas decisiones y, como consecuencia de ello, hayamos recapitado reencontrándonos con nuestra modernidad verdadera, que es la «barroca» del XVI y el XVII. En este y otros de sus escritos, Morandé amarra lo dicho con una cariñosa apología de la hacienda, esta un elemento integral de su argumento proponiéndola como el modelo social más adecuado a nuestra identidad. Explica en *Ritual y palabra...*:

El encuentro de las religiones indias y negras con el cristianismo y la modificación subsecuente de las formas y niveles de la eficacia simbólica de ambas, influye ciertamente en la organización social y cultural de América Latina. La hacienda es, en nuestra opinión, la estructura social que mejor sintetiza el sincretismo resultante en lo que se refiere a la organización interna del trabajo, al mismo tiempo que introduce relaciones mercantiles entre sus productos, desconocidas para las formas anteriormente existentes del culto. Ella constituye, en su calidad de síntesis, la «Polis» del nuevo continente y mantendrá este carácter aún mucho tiempo después de su desaparición como unidad productiva de las economías criollas (41-42).

los políticos del PRI que ordenaron la matanza], la conexión entre los ritos religiosos y los actos políticos de dominación desaparece pero, como se verá en seguida, el modelo inconsciente del poder siguió siendo el mismo: la pirámide y el sacrificio» (291 y 296). Incluso los referentes europeos de Paz son los mismos a los que recurre el sociólogo chileno: Mauss y Bataille.

Por increíble que parezca, el planteo antimoderno de Morandé ha hecho escuela. Discípulos oficiosos suyos, como Carlos Cousiño, tal vez menos sofisticadamente que el maestro, han acogido e insistido en sus premisas. Respecto de la hacienda, escribe Cousiño:

La relevancia de la hacienda no se limita ni al período colonial ni a los aspectos meramente económicos, sino que se proyecta hasta un pasado tan cercano como el comienzo de los procesos de reforma agraria hacia mediados del siglo XX y concierne al moldeamiento del *ethos* cultural latinoamericano [...] la hacienda constituye un caso que se acerca más al modelo de la dominación señorial, ya que al no ser una institución que no remunera monetariamente el trabajo resulta imposible la extracción de una plusvalía a partir de la diferencia entre el valor producido y el costo del trabajo. Pero a diferencia del modelo señorial, el hacendado logra introducir un principio de legitimación de su dominio directo en virtud de su función mediadora. Derroche y rango se encuentran, por ende, íntimamente vinculados en el mundo de la hacienda (149 y 155).

Con ese pie, el que le daba la interpretación ideológica que de su origen, «rango» y «derroche» le suministraran sus intelectuales orgánicos, la oligarquía chilena patrocinó el golpe de Estado de septiembre de 1973 pues estimó que él constituía una oportunidad para el retorno a aquello que había empezado a perder en las décadas del veinte y del treinta del siglo XX y que continuó perdiendo en las siguientes, pero que ahora, *manu militari*, podía recobrar. Ciertamente, Morandé ha aclarado posteriormente que su argumento contradecía por parejo tanto la modernidad de los desarrollistas como el neoliberalismo de los *Chicago boys*. Un análisis prolijo de sus textos nos revela, sin embargo, el anhelo de auxilio recíproco entre sus ideas y la modernidad al estilo Chicago, eso al leer él positivamente en el mundo de la hacienda la diferencia entre el trabajo no remunerado de los vasallos y el remunerado del señor (es decir, al leer él positivamente la coexistencia en ese espacio del «subdesarrollo» con el «desarrollo», dicho esto con el aborrecido lenguaje de los desarrollistas), en la medida en que el segundo, el «hacendado», es el que, a partir de lo producido por sus «inquilinos», establece «relaciones mercantiles» con el mundo extrahacendatario.

Pero el problema era que la *manu militari* no bastaba por sí sola para dar forma a un proyecto oligárquico estricto (y delirante), como pudiera ser el

de Morandé y sus seguidores, o astutamente híbrido, como el de los *Chicago boys*. Para que el gran objetivo se cumpliera, según lo que de él esperaban unos y otros, hacía falta una revolución o, mejor dicho, una contrarrevolución. La *manu militari* iba a ser imprescindible en los comienzos, eso era algo de lo que nadie dudaba. Un pueblo ensoberbecido, poseído por los que ese pueblo pensaba que eran derechos que había ganado no por su nacimiento sino en jornadas de heroica rebeldía, como el chileno de la Unidad Popular, no iba a permitir que se le privara de los mismos si es que no era por la fuerza. No habiendo en estas circunstancias condiciones para la persuasión, la oligarquía chilena concluyó que tenía que abrirle las compuertas a la brutalidad:

El Estado portaliano de los mercaderes fue siempre sustentado por una minoría. Si hubiese habido elecciones libres, las habrían perdido todas. Portales se dio cuenta que no podría gobernar si el régimen era democrático. Necesitaba un ejército, y como no lo tenía —porque el ejército de entonces era liberal—, armó uno mercenario, que fue el que triunfó en Lircay. Hay que contar la historia del ejército tal como es. Desde que asesinaron a Manuel Rodríguez, en 1818, hasta 1973, el ejército intervino violentamente masacrando en veintitrés oportunidades. En Latinoamérica es un caso único. No existe otro país donde el ejército haya violentado a su propio pueblo en veintitrés ocasiones (Salazar 693).

Antes de que la doctrina de la seguridad nacional pusiera en circulación la idea y la convirtiera en un pilar fundamental para los fines del combate contra el comunismo, ya sabían los militares chilenos lo que era pelear una «guerra interna». Las enseñanzas de la Escuela de las Américas eran viejas conocidas suyas y ahora iban a emplearlas en el proyecto de regreso de la oligarquía a sus raíces, me refiero al proyecto que los hijos de esa oligarquía, los que ella había enviado a las universidades Católica y de Chicago, remozaron, lustraron, renovaron (por ejemplo, transando el aprecio por la hacienda al aprecio por el *agrobusiness*), pero sin alejarse por eso de sus motivaciones ancestrales. Por arte de birlibirloque, el anti-comunismo estadounidense al trasladarse a la tierra chilena se transculturaba, se acriollaba y se expandía tornándose en una verdadera campaña antipueblo. La batida universal contra los comunistas se transformó en Chile, después del 11 de septiembre de 1973, en una faena de puesta en su lugar de unos

rotos que habían tenido la osadía de creerse más de lo que eran.

Despojo al pueblo chileno de su capital material y despojo simultáneo de su capital cultural. Según Ricardo Ffrench-Davis, «las remuneraciones, en el período 1974-1981, promediaron apenas tres cuartos del nivel logrado en 1970» y eso «sin haber recobrado aún en 1981 el nivel alcanzado once años antes» (109). En el mismo sentido, anota este reputado economista que las cifras de «la distribución del gasto por hogares» indican que el quintil más pobre bajó de 7,6 por ciento en 1969 a 5,5 en 1978 y a 4,4 en 1988, en tanto que el más rico subía de 44,5 por ciento a 51,0 y a 54,9 para los mismos años (315).

He ahí el despojo material, a través de un par de sus mediciones más confiables. E incluso si se argumenta que las políticas económicas neoliberales consiguieron que *a la larga* los pobres chilenos fuesen un poco menos pobres, también es verdad que han hecho que los ricos chilenos sean inmensamente más ricos. Porque el fin último de la dictadura cívico-militar chilena no era producir pobres, me interesa que eso quede muy claro, aunque sea a contrapelo de lo que denuncian las cifras aducidas arriba. El fin último de la dictadura cívico-militar chilena era producir desigualdad. Reconstruir el ordenamiento jerárquico tradicional de los habitantes del país a través de una reinstalación de las distancias sociales a cualquiera fuese el precio. Para eso, el modelo Chicago, que propendía a una concentración de la riqueza entre los miembros del quintil más rico, era funcional. Y también para eso, el enemigo de los de Chicago, el Estado, que había sido el ente igualador por excelencia, al distribuir con alguna equidad los bienes materiales y, por lo tanto, el factor democratizador por excelencia de la sociedad chilena, debía salir de la cancha. No es que el Estado chileno hubiese dejado de existir, sin embargo. Siguió existiendo, pero para adoptar todas las medidas que le facilitaran al mercado un mejor funcionamiento.

En el ámbito educacional esto mismo resulta notorio. Se recupera desde el subterráneo de los conceptos en desuso el decimonónico de «libertad de enseñanza» para oponerlo al de «Estado docente». El concepto de libertad de enseñanza, que a fines del siglo XIX le sirvió a la Iglesia Católica como bandera para mantener su injerencia sobre el aparato educacional y que tuvo en Abdón Cifuentes (1835-1928) a su más ardiente paladín, reaparece ahora pero no o no sólo para servir a la Iglesia sino a todos aquellos que sentían que sus intereses particulares estaban siendo perjudicados por la acción del Estado

igualador. La nueva (y vieja) sociedad, restaurada en su jerarquía natural, no podía menos que quitarle al Estado ese papel. Y así se hizo.

La transformación educacional chilena no se llevó a cabo toda ella en la década del ochenta. Con anterioridad a las grandes reformas de esa década se desmalezó el terreno para lo que vendría más tarde. La educación era para la dictadura chilena, como lo fue también para sus vecinas y cómplices en el Cono Sur y en toda Latinoamérica, una trinchera clave. Ocupándola se ganaba terreno en la «guerra contra el comunismo». Había en consecuencia que extirparle a la educación chilena no sólo los tumores de ese comunismo o de ese marxismo sino que había que eliminar cualquier práctica o persona que pudiese portar el contagio: deshacer el proyecto educacional previo (el de la Escuela Nacional Unificada, ENU), que por lo demás nunca llegó a puerto, expulsar del sistema a los profesores y maestros sospechosos (o desaparecerlos, si así convenía), abolir sus organizaciones gremiales y lo mismo en lo que toca a las de los estudiantes, reemplazar a las autoridades administrativas (el decreto N° 50, del 1° de octubre de 1973, acaba en las universidades con los rectores elegidos y los sustituye con rectores designados), etc. Hasta fueron prohibidos los «centros de alumnos» y los «centros de padres y apoderados». No contentos con eso, los organismos represivos del régimen repletaron las universidades y colegios con espías a sueldo. La delación era promovida y recompensada y sus denuncias producían despidos, cárcel y muerte.

Pero esas fueron sólo, por decirlo así, las externalidades de la campaña inicial. También había que meter mano en los contenidos. Recortar y fomentar. Recortar en/de los *curricula* escolares aquellas disciplinas que estimulaban la crítica y, más todavía, aquellas que les permitían a los estudiantes pensar por su cuenta y formarse así criterios propios acerca de su vida personal y social; fomentar en vez de eso un *curriculum* de servidumbre patriótica, que pusiera el acento en el conocimiento de y respeto por los emblemas, las efemérides y las figuras canónicas de la historia de Chile, junto con el conocimiento de y respeto por una agenda religiosa y racial que pusiera el acento en el humus hispánico y católico desde el cual los chilenos crecimos y del que los pueblos originarios no participan. El primer documento en que esto se explicita parece ser la *Declaración de principios del Gobierno de Chile*, que es del 11 marzo de 1974, la que, advirtiendo de entrada que «la alternativa de una sociedad de

inspiración marxista debe ser rechazada por Chile, dado su carácter totalitario y anulador de la persona humana, todo lo cual contradice nuestra tradición cristiana e hispánica», promete para el porvenir «una educación que fomente una escala de valores morales y espirituales propios de nuestra tradición chilena y cristiana» (9 y 30). Otros documentos posteriores, del 75 y del 76, por ejemplo, van a ser aún más específicos al respecto.

Con la «Directiva presidencial sobre educación nacional», de 1979, firmada por Pinochet y publicada junto con una carta al ministro Gonzalo Vial, carta esa en la que el dictador precisa que las obligaciones del Estado en la materia se reducen a la educación básica, formadora de «buenos trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas», habida cuenta de que el paso a la educación media y a la superior «constituye una situación de excepción», se cierra esta etapa. Otra, que la continúa y perfecciona, es la que se expone en la Constitución del 80, cuyos incisos 10 y 11 del artículo 19 se refieren a la cuestión educacional. De allí arrancan las reformas educacionales de los ochenta y de las que Alejandra Falabella nos ofrece un buen resumen:

- i) incentivar la libre entrada de instituciones privadas a la educación (incluidas aquellas con fines de lucro);
- ii) transferir la administración centralizada de los establecimientos públicos a los municipios;
- iii) sustituir un financiamiento estable de las escuelas por uno competitivo por alumno (*voucher*) y equiparar el subsidio del sector privado al de las escuelas fiscales;
- iv) cambiar el estatus docente de funcionario público a un régimen de empleado que negocia individualmente sus condiciones;
- v) crear una prueba nacional estandarizada (703).

En un comentario a un libro editado por Juan Eduardo García Huidobro, de 1998, el ideólogo de la derecha educacional Harald Beyer, en compañía de dos de sus asociadas, ofrece su propio balance de las transformaciones de los ochenta:

Durante el gobierno militar ocurrieron dos reformas de gran trascendencia. En primer lugar, se traspasaron los establecimientos fiscales, que hasta ese entonces dependían directamente del gobierno central a través de las Divisiones de Educación Primaria y Secundaria, a las municipalidades. Las escuelas fiscales al momento de este cambio alcanzaban a algo menos de 6.400 establecimientos y atendían a 2.3 millones de niños, un 80% del total de niños que asistían a la educación

básica y media. Las últimas escuelas pasaron al sector municipal en 1986. Con el traspaso, los profesores perdieron su condición de empleados públicos y pasaron a depender del Código del Trabajo que regía a los trabajadores del sector privado. La idea era que sus remuneraciones fueran fijadas en cada establecimiento educacional. Para facilitar el traslado, los profesores fueron indemnizados por el término de contrato con el sector público.

Una segunda reforma fundamental fue el modo en que comenzaron a asignarse los recursos. Hasta 1980 estos se entregaban a las escuelas en función de criterios históricos que no guardaban ninguna relación con el desempeño del establecimiento ni con el número de sus alumnos. A partir de ese año, sin embargo, los dineros que cada escuela recibía comenzaron a depender del número de alumnos con los que contaba. Así, las escuelas empezaron a recibir una subvención por alumno atendido cuyo valor dependía inicialmente del nivel de enseñanza del que se tratase y acorde al tipo de educación que se impartiese. De paso, la oferta educacional fue liberalizada, permitiéndose incluso que escuelas con fines de lucro optaran al financiamiento público. En Chile existía una tradición de escuelas privadas gratuitas que accedían a financiamiento público y que era de larga data en el país. Todas ellas, sin embargo, pertenecían a instituciones de la iglesia o a fundaciones privadas sin fines de lucro y recibían incluso un subsidio del fisco por cada alumno atendido, generalmente una proporción del gasto fiscal «implícito» por alumno (204).

Municipalización de la educación primaria y secundaria y municipalización del trabajo y el salario de los profesores, y cambio en la asignación de los recursos fiscales de manera de provocar la competencia entre las escuelas asignándoles a éstas los subsidios del Estado según la demanda de que eran objeto y que presuntamente demostraba su calidad. Las que lograran satisfacer un mayor número de clientes recibirían más dinero. Además, subsidios al sector privado, los que se extienden también al sector privado con fines de lucro. Quedaba pendiente aún la intervención de las universidades, que se hizo un poco después. De las ocho universidades que existían en Chile en 1981, dos de ellas eran estatales y nacionales y seis privadas. En 1981 sobreviene el desmembramiento de la Universidad de Chile y la Técnica del Estado y, por consiguiente, el término de su carácter nacional. Entre octubre de 1988 y noviembre de 1989, se agregan al sistema quince

universidades privadas y otras seis más entre fines del 89 y marzo del 90.

Para la derecha política lo que la dictadura hizo en educación a principios de la década del ochenta fue «modernizar» el sistema, eso es lo que queda a la vista en el comentario que yo cité más arriba de Bayer y compañía. En otros de sus pasajes marcados, ese mismo texto lamenta que las reformas educacionales de la dictadura se hayan desaprovechado en los años de la inmediata postdictadura. Frases como que «la nueva forma de asignar los recursos dejaba a todas las escuelas en igualdad de condiciones», que «la idea de dicha reforma era que el control de los recursos públicos, por así decirlo, quedaba en manos de las familias», que «la apertura a establecimientos con fines de lucro, que hasta el día de hoy es fuente de controversia, hay que entenderla seguramente como una manera de hacer más dinámica la oferta» y que «se veía en la competencia por alumnos una sólida base para elevar la calidad de la educación», y varias más, son expresivas de esa nostalgia y esa melancolía.

Con todo ello la contrarrevolución neoliberal logró que la educación dejara de ser en Chile un derecho y se transformara en un bien de mercado. Consistentemente, la finalidad del esfuerzo educacional dejó de ser la formación integral de los jóvenes, su desarrollo como sujetos y ciudadanos plenos, y se convirtió en un arma para la formación de mano de obra barata o, como ha dicho Carlos Ruiz Schneider, del «mínimo funcional al desempeño productivo» (104).

En paralelo, en el ámbito que los burócratas reconocen como de la «cultura» y que no es otra cosa que el género próximo dentro del cual debe incluirse la especie «educación», las directrices iniciales se encuentran en un folleto titulado *Política Cultural del Gobierno de Chile*, de 1974. Contiene ese folleto un discurso xenófobo, con seguridad salido de la pluma del «asesor cultural» de Pinochet, Enrique Campos Menéndez (1914-2007). Los tópicos son los consabidos: el argumento a favor de una cultura que arraiga en la «tradición occidental y cristiana», pero que al mismo tiempo se confiesa férreamente nacionalista y que por eso abomina del «extranjerrismo». A ello el redactor del panfleto le adosa un componente (me imagino que este es un gracioso saludo que él les hace a sus patrones militares y, en particular, a Pinochet) geopolítico.

Respecto de la estética de la vida cotidiana, junto con el blanqueamiento de los muros de la ciudad, para borrarles las consignas y rayados reminiscentes

del gobierno anterior, se procede de inmediato a un blanqueamiento de la apariencia a los ciudadanos:

un instructivo de la Dirección de Educación Secundaria definió normas sobre presentación personal. Entre las regulaciones de carácter estético-higiénico y de seguridad planteadas por la directora de esa entidad, Irma Saavedra, figuraban «la total exclusión del pelo largo en los varones; un rostro limpio de todo maquillaje, nada de adornos colgados al cuello y la total prohibición de usar zuecos para concurrir a clases por parte de las alumnas». Más aún, según esta norma, el pelo no solamente debía estar cortado de manera que se pudiera apreciar fácilmente la limpieza del cuello de la alumna, sino que debía «estar cuidadosamente peinado. Nada de chasquillas o mechones en la frente, o cabelleras al viento». La medida llegó incluso a sugerir que a los ciudadanos chilenos o extranjeros que tuvieran el pelo largo no se les permitiera realizar el trámite para sacar carné de identidad y papel de antecedentes (Errázuriz y Leiva 24).

Erradicación del desorden y la suciedad, una metáfora que es homóloga a la metáfora médica, la que llamaba a extirpar quirúrgicamente el cáncer del cuerpo social enfermo. No es raro que con esta concepción del deber ser (y del deber aparecer) de los ciudadanos se hayan producido también en Chile actos de violencia contra los productores de cultura y sus obras, idénticos a los que se produjeron en Brasil y Argentina: censura de publicaciones, quema de libros y galerías de arte, cierre de teatros, destrucción de películas, destrucción de monumentos y murales, persecución, exilio y asesinato. Todo eso era sucio y había que «limpiarlo» (o, mejor dicho, «extirparlo»). Un buen recuento de tales delitos puede hallarse en el libro de Errázuriz y Leiva Quijada ya citado.

No voy a detenerme yo, por lo mismo, en una revisión pormenorizada de estas aberraciones. Pero sí voy a decir que frente a los múltiples desenfrenos del régimen chileno en el ámbito de la cultura el ánimo resistente no decayó. Por ejemplo, a mediados de los setenta se suscita un confuso revuelo en torno a lo que se denominó el «apagón cultural» del país, evidenciado este en los bajos resultados de las pruebas estándar de evaluación escolar, que el gobierno admitió y que atribuyó a la politización de los alumnos. Pero los opositores recogieron el guante, contratacando con la triste evidencia: el apagón cultural existía en efecto, pero no obedecía a las causas que daba el gobierno sino a la mordaza directa e indirecta impuesta sobre los productores de cultura (mordaza

directa ya se sabe de qué manera/s y la indirecta a través de la aplicación de un IVA del 20 por ciento a los libros, entre otros despropósitos que han sobrevivido hasta hoy), así como al hecho indesmentible de que buena parte de esos productores chilenos de cultura estaban en el exilio⁴.

En el interior, un contraataque temprano a este estado de cosas se descubre en una muestra de 1975 del pintor Guillermo Núñez (1930), en el Instituto Chileno Francés de Cultura, que duró un día apenas y que a Núñez le costó la cárcel y el destierro. El motivo de sus infracciones pictóricas eran unos pájaros enjaulados. También, en la segunda mitad de los setenta, contra viento y marea, se suceden varios estrenos teatrales indiscretos: *Pedro, Juan y Diego*, del colectivo ICTUS con la colaboración de David Benavente (1941), en 1976; *Los payasos de la esperanza*, del Taller de Investigación Teatral (TIT), en el que Raúl Osorio y Mauricio Presutic desempeñaron la función de «compaginadores», en 1977; ¿Cuántos años tiene un día?, también de ICTUS pero con el concurso esta vez de Sergio Vodanovic (1926-2001), en 1978; y *Tres Marias y una Rosa*, del TIT y David Benavente, en 1979. Dejo constancia aquí asimismo de la formación del Círculo de Estudios de la Mujer en la Academia de Humanismo Cristiano, en 1977, y de la aparición de la Agrupación Cultural Universitaria (ACU), desde 1977 hasta 1981. Un grupo que surge asimismo, en medio de este temprano afán contestatario, es la Escena de Avanzada o Colectivo de Acciones de Arte (grupo CADA), que se fundó al finalizar la década, en el 79, reuniendo escritores y artistas plásticos con una voluntad expresa de intervención ciudadana. Figuras relevantes dentro del CADA y excelentes escritores ambos, tal vez los de mayor significación entre aquellos que permanecieron en Chile después del golpe, son Diamela Eltit (1949), cuya primera novela, *Lumpérica*, es de 1983, y el poeta Raúl Zurita (1950), que publica su primer libro, *Purgatorio*, en 1979.

Por otra parte, observo que la visión nacionalista a lo Campos Menéndez, es decir aquella que abominaba de los «extranjerismos», se vio cada vez más desafiada desde adentro por otra que era su contraria, ya que, en concordancia con la reconexión de Chile con el mundo, había empezado a dárseles cabida a las importaciones de cultura. Cultura chatarra envasada,

4. La cultura chilena del exilio constituye un capítulo por sí mismo, de enorme importancia y que yo no puedo desarrollar aquí como corresponde.

de cuya diseminación, aunque no fuesen los únicos, los canales televisivos, que habían pertenecido a las universidades desde 1958 y al Estado desde 1970, fueron los responsables principales. Se dio comienzo de este modo a un proceso que irónicamente se selló con el advenimiento de la democracia postdictatorial. Me refiero al traspaso de la televisión chilena a los privados, que lo inició Pinochet pero no lo completó y tal vez porque él y sus secuaces se daban cuenta del poder de este medio. Se completó durante el gobierno del presidente demócratacristiano Patricio Aylwin (1918-2016) cuando, con el pretexto de que la mejor política comunicacional de un gobierno democrático era «no tener política comunicacional»⁵, el canal 9 del Estado fue vendido a la empresa Megavisión.

Pero, como ya lo he señalado, el objetivo profundo de la reformas pinochetistas, *de todas las reformas pinochetistas*, fue un objetivo de clase. Reconstruir las estructuras de sustentación de la vida material de los chilenos de acuerdo con un programa económico antiigualitario, y elaborar, a partir de la ejecución de ese programa y con más empeño aún, el argumento conceptual para un recobro del *apartheid* clasista. Cambiar el país, pero, más importante que eso, cambiarle la cabeza a la población del país, haciéndole entender quiénes eran sus superiores y por qué, mediante una campaña en cuya plataforma ideológica se daban la mano el oligarquismo con el afán jerarquizador neofascista y con la lógica poco equitativa del modelo económico neoliberal. El folleto sobre la cultura del 74 lo dice: Chile fue un gran país hasta comienzos del siglo xx, cuando empezó a decaer debido a la formación entonces de una sociedad «de masas» y, por consiguiente, debido a «la pérdida del sentido de Nación». El 11 de septiembre de 1973 la oligarquía chilena aprovechó la ocasión que le brindaba una coyuntura doméstica truncada de avance al socialismo, una coyuntura latinoamericana de agotamiento del modelo económico populista-desarrollista y una coyuntura mundial de reafirmación del dominio estadounidense —esto

último en el contexto de la guerra fría—, para recuperar el poder por medio de las armas y producir con ello un vuelco en las bases materiales y simbólicas de la vida nacional. Una contrarrevolución económica y política que tenía que hacerse a la par con (e incluso podría decirse que para beneficio de) una contrarrevolución educacional y cultural.

¿Cuáles fueron sus resultados a corto, mediano y largo plazo? En el costado de la dictadura, una tensión permanente entre la «cultura patriótica» y la «mediática de importación», que conviven haciendo esfuerzos para no estorbarse y en ocasiones también para apoyarse. Un programa televisivo como «Sábado gigante», de don Francisco (Mario Kreutzberger, 1940-), en el Canal 13 de la Universidad Católica, que se inició en 1962 y se mantuvo en la programación durante el período dictatorial completo, hasta 1992, obteniendo cifras históricas de audiencia (en 1986 y 1987 llegó a transmitirse durante siete horas seguidas), es un buen ejemplo de dicha convergencia. Don Francisco le muestra a los televidentes un país en calma y satisfecho, en el que nada verdaderamente malo acontece y donde incluso las personas son capaces de olvidarse de sus desavenencias, colaborando en los momentos de crisis al interior de un solo cuerpo patrio, todo ello mientras la dictadura tortura y mata y mientras que al mismo don Francisco lo auspician los grupos económicos que son los beneficiarios de semejantes desmanes. En el costado de los opositores, por el contrario, el empeño consistió en asegurar la supervivencia de una cultura de la lucidez.

A través de numerosas expresiones, el renacimiento cultural chileno se consolida en la década del ochenta. En el teatro, donde debutan nuevos dramaturgos, Juan Radrigán (1937-2016), Marco Antonio de la Parra (1952), Ramón Griffero (1954), y algunos más; en literatura, donde aparecen libros nuevos de Eltit y Zurita, así como de otros buenos escritores. En narrativa, los libros de Ana María del Río (1948), Roberto Rivera (1950), Antonio Ostornol (1954), Ramón Díaz Eterovic (1956) y Carlos Franz (1959); en poesía, los de Manuel Silva Acevedo (1942), Elvira Hernández (1951), Verónica Zondek (1953), María Inés Zaldívar (1955), Teresa Calderón (1955) y Tomás Harris (1956); también en poesía, se inicia en los ochenta la corriente poética más importante del Chile contemporáneo a mi juicio, la de la poesía mapuche, con un libro de Leonel Lienlaf (1969), *Se ha despertado el ave de mi corazón* (1989); y en el cine, que renace desde las cenizas (entre 1973 y 1978 se habían filmado en Chile apenas dos películas) con los

5. Una frase del director de la secretaría de comunicaciones y cultura de Aylwin, Eugenio Tironi. En el número 401 de la revista *Apsi*, éste precisa su pensamiento diciendo que «ejercer la presión, la discriminación, el ocultamiento, el intervencionismo estatal, la manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación gubernamentales, aunque se esgrima para ello la ‘defensa de la democracia’ o ‘la difusión de la obra del gobierno’, sería continuar con la misma política de comunicaciones del pasado» (ctd en Otano 19).

trabajos de Silvio Caiozzi (1944), Cristián Sánchez (1951) y Carlos Flores (1944).

Pero lo más significativo son las protestas anti-dictatoriales que se extienden desde el 82 al 86. Protestas que crecen durante aquel primer lustro de la década del ochenta hasta transformarse en explosiones espléndidas de desobediencia antisistema y de simultánea prospección de un comienzo nuevo. Debe tenerse presente que en 1983 el desempleo en Chile era del 25 por ciento de la fuerza laboral, el PIB había caído en un 15 por ciento y la deuda externa era de 17 mil millones de dólares. Ese fue el aguijón material que sacó a las calles a la multitud de los pobladores, de los jóvenes, de las mujeres. Pero no sólo eso, puesto que brilla también en los discursos que estos actores sociales emiten no sólo la frustración y la ira respecto de los abusos del régimen, sino el ensayo de un nuevo modo de enfrentarlo. En los manifiestos que desvisten a la diversidad sexual (Pedro Lemebel: «Hablo por mi diferencia...»), en las publicaciones periodísticas de espíritu alternativo (*Apsi, Hoy, Análisis, Cauce, Fortín Mapocho, La Época*) e incluso en las pancartas que agitan las y los protestantes («democracia en el país y en la casa»). Pasión popular y ciudadana que hace que no sean pocos los que piensan que la sociedad civil se encuentra a las puertas lograr *por sí misma* su liberación. Una liberación de la dictadura, en primer término, pero al mismo tiempo de la tutela que sobre las identidades sociales venían ejerciendo toda suerte de mediadores oficiosos. Es en el curso de esta irrupción de una energía popular largamente contenida, con una conciencia y un lenguaje innovadores, que el proyecto feminista chileno se rearticula y relegitima. Julieta Kirkwood (1936-1985) es su exponente preclara.

Kirkwood orientó su labor teórica y su práctica política a partir de una certidumbre doble y que estaba directamente relacionada con la coyuntura en que le tocó vivir. Llamó a las mujeres chilenas a involucrarse en la «lucha por» y en la «conquista de» (uso sus propios vocablos)⁶ su identidad genérica, que ella sabía que no era un dato «natural», y las alentó a involucrarse en la «lucha por» y la «conquista de» un lenguaje distinto, que pudiese significarlas acertadamente y que debía surgir en la contienda.

6. El único libro que Kirkwood publicó en su vida es *Ser política en Chile, las feministas y los partidos*. Póstumamente, han aparecido varias reediciones de ese libro, con el título *Ser política en Chile o los nudos de la sabiduría feminista*, así como también de sus artículos en colecciones que compilaron Sonia Montecino y Patricia Crespi.

A esto, a la producción durante la lucha contra la dictadura de una identidad y un lenguaje propios, debemos atribuir nosotros el estilo literario de los últimos trabajos de Kirkwood. Un estilo que se construye como una alternativa por un lado al discurso político de la izquierda sesentera, es decir al lenguaje de sus predecesores, que a ella le sonaba a perorata gastada, y por el otro al discurso de la normatividad científica, según los hábitos de las ciencias sociales latinoamericanas de los mismos años. Para dejar atrás ambas rémoras, en el crepúsculo de su existencia, vemos a Kirkwood atareada en el ensayo de una escritura que apela a una cuota de significación connotativa que ella sospecha que la denotativa oscurece y que bien pudiera ser la que le está haciendo falta. Esa escritura pone énfasis en la carga poética que Kirkwood siente que habita *también* en la palabra. De ahí sus relatos ejemplares (el de «La mujer de Calibán», por ejemplo, en el que recoge, da vuelta y pone sobre sus pies la interpretación que ofrece Aníbal Ponce del mito shakespeariano), sus metáforas maestras (los «nudos» de la sabiduría feminista), sus apóstrofes («Usted Señora...», «Ud. patriarca ridículo...», «A Ud. patriarca entre los patriarcas...»), sus enumeraciones sin jerarquía ni puntuación («espúreas feministas políticas clandestinas»), el abuso de los deícticos («acá», «allá»), los paralelismos antitéticos de construcción («usted allá», «nosotras acá»), las paranomasias y las rimas internas («perfectas hijas nacidas madres meciendo niñas»), las parodias sarcásticas («que no de rodillas vive el hombre...») y en general los intertextos de la más variada procedencia.

Kirkwood fue una mujer de su tiempo, pero no fue, no pudo ser, una mujer del tiempo que vino después. Murió el 8 de abril de 1985, y no llegó por eso a convertirse en testigo del desenlace que tuvieron sus esperanzas de emplazamiento en Chile de una democracia genuina.

Sabemos que el documento «Bases de sustentación del régimen democrático», suscrito por políticos profesionales, pertenecientes a trece de los partidos de oposición a Pinochet, y una especie de protoprograma de la que iba a ser posteriormente la coalición de gobierno, la Concertación de Partidos por la Democracia, se publicó en una inserción pagada del diario *El Mercurio* el 11 de septiembre de 1986. Por su parte, Rafael Otano, en sus *Crónica de la transición* (1995) y *Nueva crónica de la transición* (2006), afirma que el «kilómetro cero» del movimiento transicional fue un «seminario» de estudios al que convocó el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), un *front* del Partido

Demócrata Cristiano, y que con el título «Un sistema jurídico-político constitucional para Chile» tuvo lugar en el Hotel Tupahue de Santiago los días 27 y 28 de julio de 1984. Tampoco faltan los que retrotraen ese comienzo mítico aún más atrás, a un homenaje al patriarca demócratacristiano Gabriel Valdés, en el Círculo Español de Santiago, a principios del 83 y al subsecuente «Manifiesto Democrático», suscrito el 14 de marzo de ese año por gente que iba desde la derecha republicana hasta una fracción del socialismo.

Pero, como quiera que sea, esos fueron los primeros adelantos hacia el perfil que Chile iba a mostrar a fines del siglo xx y comienzos del XXI. Un Chile en que el bullicioso reclamo de los movimientos sociales no contaba ya con el crédito de unos pocos años antes y al que retornaban en gloria y majestad los políticos de oficio, los políticos de la «clase política», declarándose convencidos de que lo mejor que se podía hacer era pactar con Pinochet.

Eso hicieron, pactaron con Pinochet, y no precisamente a su pesar. El resultado son casi treinta años de postdictadura, en los que lo esencial ha sido no el quiebre sino la continuidad con morigeraciones del *statu quo* anterior. Sigue en pie en el país el modelo económico privatizador y globalizante, en 2018 un tercio de la fuerza de trabajo está subempleada y sin protección social ninguna, nuestra Constitución es la de 1980 y en el espacio público se le hace el quite a cualquier discusión política honesta y de fondo, privilegiándose en cambio los «acuerdos», los que, como ha dicho bien Tomás Moulian, no son sino «la etapa superior del olvido» (37).

Provisto de una vasta colección de amortiguadores, que alivian o dicen que alivian su impacto lesivo sobre las condiciones de vida del pueblo y que frenan de ese modo el descontento, el modelo neoliberal goza hoy en Chile de una salud aun mejor que la que tenía hace treinta años. Correcta me parece, por consiguiente, la tesis que afirma que los gobiernos chilenos de la postdictadura, aparte de no haberse deshecho del legado del pinochetismo en el área económica, lo han aplicado en áreas que se encontraban aún vírgenes, abriéndolas así no sólo a la voracidad del empresariado doméstico sino también a la de las transnacionales y en todo el perímetro de lo que es rentable (en educación, pienso por ejemplo en las universidades del grupo estadounidense Laureate, cuyo arribo a Chile es posterior a Pinochet).

También ha habido algunos intentos de reforma, eso es justo consignarlo. Pero con ello hay que consignar que su profundidad ha sido acotada o, para

usar la frase del presidente Patricio Aylwin, que son reformas que han sido hechas «en la medida de lo posible». Anoto a propósito el fin del sistema electoral binominal en política; en educación, la recuperación por lo menos parcial de la gratuidad; en sociedad, la unión civil entre personas del mismo sexo; en salud, la ley de aborto por tres causales, todo eso principalmente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet (1951). Hay que reconocer además que la brutalidad por la libre ya no está, aun cuando eso no signifique que hayan desaparecido del todo las violaciones de los derechos humanos, las que son visibles en el trato que se le da al pueblo mapuche y en el que se les está dando a los nuevos inmigrantes, sobre todo a los inmigrantes de color.

Sobreviven por otra parte las viejas prácticas antidemocráticas, y eso porque la desconfianza en la capacidad de los ciudadanos para gobernarse parece ser un dogma inamovible, lo que naturalmente conduce a minimizar la participación que éstos debieran tener en las decisiones que conciernen a la vida en común. Puede echársele la culpa a la terca persistencia de los enclaves autoritarios después de diecisiete años de dictadura o a la fuerza de los poderes fácticos, empresarios, iglesia, militares, o a la tecnocracia neoliberal, que pulula aún por todas partes y cuyo discurso es de un individualismo competitivo y antisolidario a toda prueba. Yo tengo para mí, sin embargo, que la contraparte de la desconfianza en la capacidad ciudadana es la vieja confianza en la superioridad de las élites.

¿Por qué extrañarse entonces de que esta misma lógica sea la que domina en el campo de la cultura? ¿Que perduren en este campo muchos elementos de la ideología y el imaginario que quiso instalar Pinochet combinados con una democratización hecha a medias? Para quien quiera oír noticias más optimistas que las mías, recomiendo el volumen *La cultura durante el período de la transición a la democracia 1990-2005*, publicado en 2006 por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En la presentación de ese libro, que firma el ministro de entonces, José Weinstein, y sobre todo en el anexo sobre «políticas culturales», el tono es de una autocomplacencia sin inhibiciones:

en todas las disciplinas artísticas se detecta un aumento significativo en cantidad y calidad de creaciones y obras nacionales. Además, se hace evidente una renovación de los creadores, que se expresa en miles de jóvenes desplegando sus talentos y sus vocaciones y en un desarrollo de instituciones públicas y privadas

comprometidas con la gestión cultural. Hay también más público para las distintas manifestaciones artísticas, y se experimenta una demanda creciente de arte y de cultura, especialmente en regiones distintas de la metropolitana (377)⁷.

No pierden la oportunidad de congratularse, asimismo, los colaboradores en ese volumen, por el acceso del «público» chileno a la televisión (93,8 por ciento) y a la radio (90,6 por ciento) y que «El 41,2% de la población mayor de 16 años utiliza Internet, especialmente como medio de comunicación (mail y chat)», lo que «entre los sectores de escasos recursos» se da fundamentalmente «gracias a los cybercafés u otros lugares públicos (34,5%)» (386). Reconocen, sin embargo, que «es preocupante el hecho de que el 60% de la población se limite a un consumo cultural de pobreza, es decir, a un consumo cultural marcado por la oferta de los medios de comunicación», a lo que añaden que «se ha demostrado que estos consumos mínimos están asociados a falta de sociabilidad, menor valoración de la diversidad y menor valoración de la democracia como forma de gobierno» (Íd.). Pese a ello, no les parece que constituya una exageración aseverar que «una primavera cultural se ha instalado en el país en este cambio de siglo» (377).

He ahí la voz oficial.

Ahora bien, yo no estoy diciendo aquí que esa promoción de la cultura por parte de los gobiernos postdictatoriales sea falsa. Hay al menos una «cierta» cultura que los gobiernos chilenos postdictatoriales han promovido con un entusiasmo musculoso y genuino, y me refiero a la que se concreta en los festivales, en las conmemoraciones, en los espectáculos masivos de diverso tipo, mientras menos exigentes mejor, y que por lo tanto reditúa políticamente las inversiones que en ello se hacen. Tampoco afirmo que, al margen de ese interés oficial, no haya habido durante esta etapa emprendimientos culturales de valor. Lo más importante de la producción de Roberto Bolaño (1953-2003), el cuarto gran novelista de la historia de Chile, aparece después de la salida de Pinochet de la Moneda (*Los detectives salvajes* es de 1998). En igual sentido, no me parece desestimable una narrativa más joven, la que debuta en 1996 con la publicación de *En voz baja*, de

Alejandra Costamagna (1970), una novela a la que han seguido otras no menos buenas de autores como Nona Fernández (1971), Alejandro Zambra (1975) y Álvaro Bisama (1975). También en literatura, la mejor poesía chilena reciente es la mapuche y en su archivo se cuentan autores de la calidad del mencionado Leonel Lienlaf, Elicura Chihuailaf (1952) y Jaime Huenún (1967). Por último, el cine chileno no había conocido un florecimiento como el actual a través del trabajo de directores como Pablo Larraín (1976), Matías Bize (1979) o Sebastián Lelio (1974).

Pero la luna tiene también un lado oscuro. Por ejemplo, en septiembre de 2013 el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, dio a conocer un estudio según el cual un 44 por ciento de los chilenos entre los quince y los veinticuatro años padece de analfabetismo funcional en lectura de textos, un 42 por ciento en lectura de documentos y un 51 por ciento en el área cuantitativa. El informe, que encargó la Cámara Chilena de la Construcción, agregaba que, para poder comunicarles sus recomendaciones de seguridad a los trabajadores, los *managers* del rubro se habían visto en la obligación de recurrir al empleo del dibujo. Mirando esas figuritas dibujadas en distintas situaciones era como los obreros chilenos de la construcción llegaban a enterarse de lo que tenían que saber para evitar accidentes.

Otrosí: un estudio de 2017 realizado por ADIMARK GFK, comprobaba que en Chile hay un 52 por ciento de personas que leen libros «menos de una vez por mes» y un 4 por ciento que honestamente declara que no lee «nunca», lo que suma un 56 por ciento de «no lectores». Más grave aún es que, según un estudio anterior de esa misma Fundación, el 24 por ciento de los chilenos mayores de cincuenta años, que fueron a la escuela y que allí aprendieron a leer y escribir, o no aprendieron bien o se les olvidó y hoy no pueden seguir instrucciones escritas. Del mismo modo, una encuesta de 2011 del ya mencionado Centro de Microdatos de la Universidad de Chile había mostrado que apenas un 3 por ciento de la población del país lograba evaluar críticamente o formular hipótesis derivadas de conocimientos especializados en relación con el tema del texto que leían mientras que el 84 por ciento no lograba una comprensión adecuada de textos largos y complejos.

Finalmente, cito una estadística de 2018: a nivel de la enseñanza superior, el promedio que en el área de lenguaje obtuvieron los alumnos provenientes de los colegios públicos-municipales en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de fines del año anterior fue de 474 puntos, cuando el máximo es

7. Aclaro que una exposición algo menos consentidora que las del ministro y el «anexo» es la que en el mismo volumen oficial firma Bernardo Subercaseaux: «Cultura y democracia» (19-29).

de 850 y el mínimo exigido por las universidades del Consejo de Rectores para concederles admisión a sus postulantes es de 500 (los postulantes que provenían de colegios particulares subvencionados promediaron 508 y los de los particulares pagados 597, reflejándose en ello las diferencias entre las clases sociales). En la misma prueba, frente a 151 «puntuajes nacionales», 117 fueron en matemáticas, 14 en historia y 9 en lenguaje y comunicación. Agréguese a lo anterior las respuestas dadas a una pregunta de la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), un organismo ligado a la derecha liberal, de agosto de 2012, respecto a «lectura de noticias sobre política»: el 49 por ciento de los interrogados manifestó no leerlas; el 38 por ciento, hacerlo algunas veces, y sólo el 13 por ciento frecuentemente.

¿Qué deduzco de todo esto? Deduzco que Chile adolece de un déficit cultural serio y respecto del cual me considero en condiciones de asegurarle al lector que es inversamente proporcional al nivel de maduración que ha alcanzado la opción privatizadora y globalizante que se viene implementando en el país desde 1973. Un capitalismo que ha acatado el papel de segundo orden que le asigna la globalización, limitándose a exportar materias primas y a importar lo demás, no necesita una población educada. *No le hace falta*. Y tampoco genera ese capitalismo una cultura ciudadana porque *desconfía por principio del esfuerzo social*. Esto, que para los militares no era un problema, no se solucionó después. Porque, como es bien sabido, el capitalismo lo permea todo, desde la extracción minera y el cultivo y cosecha de la fruta hasta las relaciones interpersonales en la vida diaria. Así, el régimen económico actual de Chile, que exacerba hasta el delirio las proclividades degenerativas del sistema, funciona, tiene que funcionar, en una estrecha asociación con sus correlatos de cultura o, mejor dicho, a través de una asociación que apuesta a la legitimidad tanto como a la creación y recreación del capitalismo gracias la conversión de sus paradigmas culturales en materia de sentido común. La encuesta CEP de 2012, a la que me referí más arriba, esa que hablaba de un 49 por ciento de chilenos que no leían noticias sobre política, informaba en otro de sus apartados que sólo un 50 por ciento de la población con derecho a voto tenía intenciones de ejercerlo en las elecciones municipales de octubre de 2012. Pues bien, cinco años después, en la elección presidencial de 2017, en primera vuelta se abstuvieron el 55 por ciento de los votantes posibles y en la segunda el 48,8 por ciento. Tenemos pues una comunidad nacional en cuyo interior la mitad

de quienes la forman no lee ni vota. Votan en Chile los que leen, o sea (y esto en el mejor de los casos) el cincuenta por ciento más o menos informado y que también es, el cincuenta por ciento de arriba en el ordenamiento de las clases sociales.

Los viejos anarquistas y los viejos socialistas eran conscientes del poder que confiere la letra para las tareas de la emancipación. Libros y sobre todo periódicos obreros se publicaron y circularon a fines del siglo XIX y comienzos del XX de mano en mano en los países del Cono Sur de América, de un lector a otro e incluso de un país a otro, sumergidos en el fondo de los lustrines o de las cajas de herramientas y sin que los guardias fronterizos se percataran de su existencia; los leían los que estaban habilitados para hacerlo, mientras los otros escuchaban lo que les transmitían aquellos que habían aprendido a leer. En el Chile de la Unidad Popular, entre 1971 y 1973, la Editorial Quimantú publicó por su parte 12.000.093 libros con 247 títulos diferentes en poco más de dos años y de los cuales cuando se produce el golpe de Estado se habían vendido 11.164.000, casi todos en los kioscos de periódicos y a un precio que cualquier trabajador podía permitirse ¿Por qué, me pregunto yo, el progresismo chileno ha renunciado a esta herencia? ¿Acaso se creyeron el cuento liberal, el que les decía que llegamos a este mundo enteros, autosuficientes, y que por lo tanto no nos hace falta nada más? ¿O es que se creyeron el cuento postmoderno, más liberal que el liberal, el que opina que el «subalterno» puede y debe hablar por y desde sí prescindiendo de cualquier intermediario?

Tenemos pues perfecto derecho a preguntarnos si no será que los actuales dueños del poder en Chile están resucitando el temor de los viejos, la sospecha de que un pueblo mejor educado y más culto va a dejar de ser el pueblo dócilmente trabajador que ellos necesitan para llevar a puerto cualquiera sea su proyecto de país. Porque parece que esas personas siguen pensando en una sociedad ideal compuesta por gente que manda y por gente que obedece, la primera habiendo sido educada hasta el máximo de sus potencialidades para los fines superiores que Dios o el destino le fijaron, y la segunda sólo en el mínimo necesario, o sea, habiendo sido educada sólo para los fines inferiores que Dios o el destino les asignó. Y de lo demás..., bueno, que de lo demás se ocupe la televisión.

O sea que las conciencias de los «otros» las llene la banalización, la superficialización, la stupidización y el envilecimiento, configurándose de ese modo la que es, la que ha sido, entre nosotros, durante

los últimos cuarenta años, la estrategia favorita de las políticas culturales. Pinochet tuvo una política cultural, según creo haberlo mostrado en páginas anteriores, la que se movió entre el nacionalismo autoritario, con toda la fanfarria de los desfiles militares, el folklore oligárquico, los saludos a la bandera y una canción nacional a la que se le repusieron versos alusivos a los «valientes soldados de Chile» que no se habían cantado desde hacía cien años, y la banalidad mediática, la de las «ideologías livianas», como suele decirse, con pretensiones globalizantes y orientada esencialmente hacia el consumo.

Los años de la postdictadura han visto la atenuación (no la desaparición) de la primera de esas dos líneas de cultura y la mantención y expansión enfebrecida de la segunda. El resultado es la poca política y la mucha farándula, constituyéndose esta última en la norma para quienes administran tales asuntos y que suelen ser, muy consecuentemente, personalidades conspicuas del mundo del espectáculo. Bolaño, que como ya dije es el mejor novelista chileno de fines del siglo xx y principios del XXI, lo manifestó ácidamente: «a veces tengo la impresión fatal de que el 11 de septiembre nos ha amaestrado de forma irreversible» (82). El autor de *Los detectives salvajes* sabía de qué estaba hablando. De hecho, en los periódicos chilenos la sección de «cultura» ya no existe; lo que existe es una sección de «cultura y espectáculos». Se entiende así que hoy sea más fácil pasar desde el protagonismo de una teleserie a la cabeza del ministerio de cultura que hacerlo desde una universidad o desde algún centro de estudios avanzados. El Chile postdictatorial es, ha sido, al fin de cuentas, en esto como en todo lo demás, menos un desarticulador de los extravíos de la dictadura que su seducido discípulo.

Bibliografía

- BEYER, Harald; Bárbara Eyzaguirre y Loreto Fontaine. «La reforma educacional chilena editado por Juan Eduardo García Huidobro». *Perspectivas*, 2, (2001): 289-314.
- BOLAÑO, Roberto. «Una proposición modesta». Ignacio Echeverría (ed.). *Entre paréntesis. Ensayos artículos y discursos (1998-2003)*. Barcelona: Anagrama, 2008.
- COUSIÑO, Carlos. *Razón y ofrenda. Ensayo en torno a los límites y perspectivas de la sociología en América Latina*. Santiago de Chile: Cuadernos del Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1990.
- ERRÁZURIZ, Luis Hernán y Gonzalo Leiva Quijada. *El golpe estético. Dictadura militar en Chile 1973-1989*. Santiago de Chile: Ocholibros, 2012.
- FALABELLA, Alejandra. «El mercado escolar en Chile y el surgimiento de la nueva gestión pública: el tejido de la política entre la dictadura neoliberal y los gobiernos de la centroizquierda (1979 a 2009)». *Educação & Sociedade*, 132, (2015): 699-722.
- FRENCH-DAVIS, Ricardo. *Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Tres décadas de política económica en Chile*. Santiago de Chile: Comunicaciones Noreste Ltda. y LOM, 2003.
- GÓNGORA, Mario. *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago de Chile: Ediciones La Ciudad, s. f.
- Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*. Tomo I: 16. En línea: <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/informe-rettig.htm>
- JUNTA MILITAR. *Declaración de principios del Gobierno de Chile*. Santiago de Chile: Gabriela Mistral, 1974.
- KIRKWOOD, Julieta. *Ser política en Chile, las feministas y los partidos*. Santiago de Chile: FLACSO, 1986.
- LEMEBEL, Pedro. «Manifiesto (hablo por mi diferencia)». *Loco afán. Crónicas de sidario*. Santiago de Chile: LOM, 1996.
- MORANDÉ, Pedro. *Cultura y modernización en América latina: ensayo sociológico acerca de la crisis del desarrollismo y de su superación*. Santiago de Chile: Cuadernos del Instituto de Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile, 1984.
- MORANDÉ, Pedro. *Ritual y palabra: aproximaciones a la religiosidad popular latinoamericana*. Santiago de Chile: Instituto de Estudios de la Sociedad (ISE), 2007.
- MOULIAN, Tomás. *Chile actual: anatomía de un mito*. Santiago de Chile: ARCIS y LOM, 1997.
- OTANO, Rafael. «La venta de *La Época*: jaque al pluralismo». *Apsi* 401 (21 de octubre-3 de noviembre, 1991): 15-19.
- PAZ, Octavio. «Crítica de la pirámide». *El laberinto de la soledad, Postdata, Vuelta al Laberinto de la soledad*. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.
- PINOCHET, Augusto. «Directiva presidencial sobre educación nacional». *El Mercurio*, 6 de marzo de 1979.
- RUIZ SCHNEIDER, Carlos. «Educación y mercado o el baile de los que sobran». *De la República al mercado. Ideas educacionales y política en Chile*. Santiago de Chile: LOM, 2010.
- SALAZAR, Gabriel. «Historiador Gabriel Salazar derriba mitos nacionales». *Punto Final*, 694 (2009).
- SUBERCASEAUX, Bernardo. «Cultura y democracia». Eduardo Carrasco y Bárbara Negrón (eds.). *La cultura*

durante el período de la transición a la democracia 1990-2005. Santiago de Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2006.

WEISTEIN, José. «Chile quiere más cultura. Definiciones de política cultural, 2005-2010». Eduardo Carrasco

y Bárbara Negrón (eds.). *La cultura durante el período de la transición a la democracia 1990-2005*. Santiago de Chile: Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2006.